



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Juan Alfonso Reyes Barahona

Demandado: Municipio de Rondón

Radicado: 15001 33 33 004 **2017 00217 00**

Ingresa el proceso con informe secretarial, para decidir lo que corresponda respecto al trámite del recurso de reposición presentado por apoderado del municipio de Rondón.

1. ANTECEDENTES

El apoderado del municipio de Rondón interpuso recurso de reposición contra el auto de 28 de marzo de 2019, mediante el cual se dispuso fijar como gastos provisionales del peritaje, decretado en forma conjunta para la parte demandante y el ente territorial accionado, la suma de seis millones de pesos (\$6.000.000), los cuales debían ser cancelados directamente a la entidad encargada del peritaje, ADAJUP-BOY-CAS-SAS, para lo cual cada una de las partes debía pagar la suma de tres millones de pesos (\$3.000.000).

2. DEL RECURSO

El recurrente, con base en lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 1437 de 2011, señaló que los honorarios del perito solo pueden ser fijados una vez se escuche al perito en la audiencia de pruebas o de contradicción del dictamen y hasta antes del traslado de las objeciones; agregó que el CPACA guardó silencio en lo concerniente a los gastos de la pericia, además el artículo 230 del CGP solo reguló el señalamiento de gastos de los dictámenes decretados de oficio y no de los que son fijados a instancia de parte.

Así las cosas, consideró que al no existir norma especial, el Despacho no podía señalar los gastos provisionales solicitados por el auxiliar de la justicia que rendirá los informes técnicos, pues la fijación o reconocimiento de dineros se tendrá que concretar a los honorarios de la experticia, y en observancia de las tarifas oficiales del caso; por consiguiente, si el perito incurrió en gastos para la elaboración del dictamen deberá soportarlos con documentos contables o facturas que cumplan con los requisitos legales a fin de obtener su reconocimiento.

Adicionalmente, aseguró que el perito no hizo referencia a si los gastos solicitados hacen parte, exclusivamente, del peritazgo referente al levantamiento patológico

de daños, o si también serán destinados para la práctica del avalúo, que es de resorte de la parte demandante.

A su juicio, lo expuesto se acentuó en razón a que los gastos se encuentran a cargo de una entidad pública, toda vez que estos no se encontraban acreditados, pues eran, solamente, una expectativa sin sustento de proyección de gastos

3. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre los autos susceptibles de recurso de apelación no se encuentra enumerado el auto que dispone fijar gastos provisionales a los auxiliares de la justicia.

En este orden, será procedente el recurso de reposición respectivo, en los términos del artículo 242 *ejusdem* que dispone:

“ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. *Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.*

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”

En lo relacionado con la oportunidad de este recurso, los artículos 318 y 319 del CGP disponen lo siguiente:

“Artículo 318. Procedencia y oportunidades. *(...)*

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

Artículo 319. Trámite. *El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.*

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo 110.”

De lo anterior, en el caso concreto, puede concluirse que el recurso ejercido es procedente y fue interpuesto oportunamente, por lo que el Despacho procederá a desatarlo como sigue:

En primer lugar, es importante recordar que en la audiencia inicial, a solicitud de la parte demandante, se decretaron dos dictámenes periciales, uno, a fin de que se practicara un avalúo de la casa lote materia de la *litis* y se determinara si la vivienda podría ser reparada, o por el contrario, debería ser demolida y, otro, con el objeto de que se realizara un estudio de patología estructural, con elaboración de planos estructurales y memorias de cálculo, para verificar el desplazamiento de la bancada del a vía, con ocasión de la construcción del coliseo del municipio de Rondón frente al inmueble por el que se pretende la reparación.

El Despacho ateniendo a que la prueba solicitada por la parte demandada, consistente en determinar la relación que pudiera existir entre la construcción del coliseo municipal de Rondón y los daños alegados por los demandantes, tenía el mismo objeto que el segundo dictamen decretado, dispuso que el mismo fuera practicado en conjunto con el municipio de Rondón, por lo que el pago de honorarios frente a este peritaje, en específico, debería ser asumido por el municipio en un 50%.

Para la realización de los dictámenes decretados, el Despacho designó a tres expertos inscritos en la lista de auxiliares de la justicia, nombramiento que fue aceptado por la empresa ADAJUP BOY-CAS-SAS, que, a su vez, delegó al ingeniero Edison Duvan Arias Bohórquez para rendir el respectivo informe técnico.

El perito delegado allegó cotización de los gastos necesarios para la realización de la experticia por un total de \$12.390.000, correspondientes a: i) estudios y diseños, ii) trasportes y alimentación y iii) papelería y otros; por tal motivo, esta Instancia Judicial al estimar que la solicitud del perito, refería, exclusivamente, al dictamen decretado en forma conjunta entre la parte demandante y el municipio de Rondón, atendiendo a la complejidad del dictamen encomendado, mediante auto de 28 de marzo del año que avanza, dispuso como gastos provisionales la suma de \$6.000.000, que debía ser cancelada proporcionalmente por las partes, es decir, \$3.000.000 cada una.

De acuerdo con lo anterior, el dictamen fue decretado a favor de las partes, para lo cual se designó a un profesional de la lista de auxiliares de la justicia, luego, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, por disposición del artículo 229 del CGP numeral 1º, relacionado con la adopción de medidas para facilitar la actividad del perito, este Despacho es competente para determinar lo concerniente a los gastos y honorarios del perito.

Además, debe advertirse que los gastos tienen relación con los viáticos, costos de transporte y demás que sean necesarios para la realización del dictamen, luego, distan de los honorarios del perito que, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Acuerdo PSAA15-10448 del 28 de diciembre de 2015, constituyen una equitativa retribución del servicio público encomendado, y que, según lo

dispone el artículo 221 de la Ley 1437 de 2011, deben fijarse con sujeción a la tarifa oficial en el auto de traslado de las aclaraciones o complementaciones al dictamen, cuando estas han sido solicitadas; o una vez vencido el término para solicitar las aclaraciones y complementaciones, cuando no se soliciten.

En ese orden, al considerar que, tal como lo afirmó el apoderado de la parte demandada, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no reguló lo referente a los gastos provisionales del perito, en aplicación de la remisión normativa consagrada en el artículo 218 *ibídem*, deben aplicarse las normas del Código General del Proceso, específicamente, el artículo 364 que impone a las partes la obligación de pagar los gastos y honorarios que se causen en la práctica de diligencias y en las pruebas que soliciten, y contribuir a prorrata en las pruebas que sean comunes.

Asimismo, el artículo 233 *ibídem* consagra el deber de colaboración de las partes con el perito, facilitándole los datos, las cosas y el acceso a los lugares necesarios para el desempeño de su cargo, y de no hacerlo, tal conducta se apreciará como indicio en su contra. Por consiguiente, estas normas permiten concluir que corresponde al Juez como conductor del proceso, ordenar el pago de los gastos requeridos por el perito para cumplir con su labor, mientras que las partes tendrán el deber de auxiliar al experto en todo aquello que necesite.

Lo anterior, sin perjuicio de que una vez sustentado el dictamen pericial, el Despacho proceda a la fijación de los honorarios de acuerdo con los criterios establecidos por el Código General del Proceso y el Acuerdo PSAA15-10448 del 28 de diciembre de 2015, del Consejo Superior de la Judicatura, estos son, complejidad del proceso, cuantía de la pretensión, duración del cargo, calidad de la experticia, y requerimientos técnicos, científicos o artísticos propios del cargo, actuación que se surtirá en las etapas dispuesta el artículo 221 del CPACA.

Ahora, como se señaló previamente, el perito aportó cotización donde señaló que los gastos solicitados correspondían a los estudios y diseños del levantamiento arquitectónico, estudio geotécnico, estudio de patología estructural y diseño y memorias de cálculo, los alimentos y transportes por los mismos conceptos y la papelería necesaria para el efecto, por tanto, es claro que el auxiliar de la justicia hizo referencia, únicamente, al dictamen decretado de manera conjunta entre la parte demandante y el municipio de Rondón, sin que se evidencie que la fijación de los gastos provisionales puedan afectar el erario de dicho ente territorial, pues, tal como se advirtió en el auto recurrido, a la luz de lo normado en el inciso final del artículo 230 del CGP *“Con el dictamen pericial el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que incurrió para la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberá reembolsarlas a órdenes del juzgado.”*, lo cual, implica que con posterioridad a presentación de la experticia, el perito deberá

269

soportar los gastos en que haya incurrido para cumplir su labor, y las sumas no justificadas deberán devolverse.

En suma, comoquiera que no prospera ninguno de los argumentos de inconformidad, se confirmará el auto recurrido.

De conformidad con lo antes expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja.

RESUELVE

PRIMERO.- No reponer el auto del 28 de marzo de 2019, según las razones expuestas en esta providencia.

Notifiquese y cúmplase

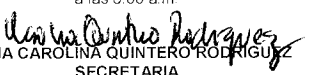

ÁNGELA MARIA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

1CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR
ESTADO

Nº 28 De Hoy 21 de junio de 2019
a las 8:00 a.m.

DIANA CAROLINA QUINTERO RODRÍGUEZ
SECRETARIA

¹ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 21 de junio de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co.
Carolina Quintero Rodríguez Secretaria